



No es el primer ex alcalde que protege...

“Blinda” GPE a César Bleizzefer de caso Huatabampo

El pasado 11 de septiembre del mismo 2009, el ciudadano Enrique Martínez Mondaca presentó un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Reforma Agraria, solicitó un juicio de nulidad de los títulos de propiedad y la cancelación de la escritura pública número 1890 con fecha de 25 de agosto de 2009...

Por Jesús Ortega / Dossier Político

Día de publicación: 2014-03-11

Hermosillo, Sonora (DP).- Hasta la noche del lunes César Bleizzefer Vega continuaba al frente de la Subsecretaría de Asuntos Sociales Prioritarios de la Secretaría de Gobierno pese al caso de los terrenos en la playa que fueron vendidos en su administración cuando era alcalde de Huatabampo, según consta en el Expediente 586/09.

El pasado 11 de septiembre del mismo 2009, el ciudadano Enrique Martínez Mondaca presentó un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Reforma Agraria, solicitó un juicio de nulidad de los títulos de propiedad y la cancelación de la escritura pública número 1890 con fecha de 25 de agosto de 2009.

Dicha escritura fue notariada por el panista y Notario Público 87, Víctor Manuel Vázquez Romero, el pasado 4 de marzo cuando el juez de la Primera Instancia de lo Civil, Olivia Guadalupe Elías Ruiz, sentenció la nulidad absoluta de los títulos de propiedad extendidos por el ayuntamiento de Huatabampo a favor de inmobiliaria CDC, con fecha 20 de agosto del 2009.

Estos procesos se llevaron a cabo durante la administración municipal del PAN, encabezada en una primera instancia por Cesar Bleizzefer Vega y después por Romeo Planaguma, hoy director de Salud Escolar.

El pasado 9 de octubre del 2012, Dossier Político documentó que el gobernador Guillermo Padrés realizó 4 cambios en su Gabinete donde destacan los ex alcaldes Alejandro Zepeda Munro y José Ángel Hernández, quienes dejaron en “quiebra” a Puerto Peñasco y Nogales, respectivamente, según lo declarado hace 3 semanas por el tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda.

Los nuevos funcionarios estatales ocuparán la Subsecretaría Técnica del Ejecutivo y la Dirección Administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el resto de la administración, movimientos anunciados en la víspera del Tercer Informe de Gobierno de Padrés Elías el próximo lunes 15.

Además de estos cambios, el Gobernador Padrés también dio a conocer que Francisco Villanueva ocupará el cargo de subsecretario de Gobierno en sustitución de Luis Fernando Rodríguez quien a partir de hoy ocupará la representación del Gobierno del Estado de Sonora en la Ciudad de México.

El 22 de septiembre de ese 2012, ante la grave crisis financiera por la que atraviesan más del 60 por ciento de los Municipios de Sonora, el tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda, pidió a los nuevos Alcaldes que denuncien las arcas vacías y el endeudamiento público a la Contraloría estatal a fin de iniciar con las investigaciones.

En esa oportunidad, el tesorero dijo que “los Presidentes Municipales entrantes deben denunciar el daño patrimonial por violar las leyes y por lo tanto deben de proceder en consecuencia denunciando esas irregularidades ante la Contraloría estatal, pero aquí cada ayuntamiento tiene que decidir según sea el caso”.

Destacó que el Municipio con mayores problemas financieros es Puerto Peñasco, y de hecho son más, pero hasta este momento los alcaldes que llegaron a trabajar a estos municipios son los únicos que se han acercado al Gobierno del Estado a solicitar rescate financiero, por lo que se avizora un panorama oscuro al finalizar el año y la implementación de nuevos impuestos en Sonora, dijo el funcionario estatal.

“Piden el apoyo al Gobierno estatal porque están llegando y se van encontrando con sorpresas, adeudos de nóminas, adeudos con proveedores, no están todos los bienes que dicen que están en los Municipios”, apuntó.

Informó que algunos presidentes municipales de las pasadas administraciones, incluso, se acercaron al Gobierno para que los apoyaran con recursos para el pago de los últimos adeudos por lo que se les parte del Fondo de Participación Municipal... pero no les fue suficiente.

“A algunos municipios se les adelantó el 50 por ciento de sus participaciones, pero ni así les alcanzó a los nuevos alcaldes; los ayuntamientos, la mayoría, no se encuentran con finanzas sanas, tienen adeudos de sueldos, de proveedores, de gasolina, con la Comisión Federal (de Electricidad)... todos ellos están ejerciendo una presión muy fuerte sobre los nuevos alcaldes, hay Ayuntamientos que los recibieron a oscuras, sin luz porque se las cortaron”, aseguró.

El 18 de abril, el entonces diputado local Ulises Cristópulos Ríos, aseveró a Dossier Político que “es evidente que el Gobierno del Estado está en quiebra, pues una gran cantidad de proveedores ha manifestado de manera, algunos discreta y otros de forma abierta ante los diputados, que tienen el problema de adeudos muy fuertes del Gobierno del Estado.

Hay obras que no se concretan, apoyos que no llegan, y una gran cantidad de proveedores a los que se les deben fuertes cantidades. Esto indica una situación muy compleja en cuanto a la capacidad económica del Gobierno del Estado”.

Como se recordará, la calificadora de deuda Standard& Poor's comentó en su momento que, de continuar el excesivo gasto corriente del Gobierno, el Estado podría caer en una calificación crediticia a la baja. Ahora, unos meses después, Fitch Ratings ya dio al estado una calificación crediticia negativa.

Por su parte, el 23 de abril del presente, el entonces diputado federal Miguel Pompa denunció a este medio “un grave desorden financiero” del Gobierno de Sonora, al acusar que mantiene adeudos con transportistas locales, de realizar descuentos a trabajadores del Estado.

Explicó que el desorden financiero ha tenido un impacto directo en las actividades productivas del agro sonorenses y ha polarizado a la sociedad en temas como el agua, el transporte, la educación, la seguridad pública y la procuración de justicia.

Hay un desorden fiscal importante en Sonora que no ha salido totalmente a flote porque el gobierno federal lo solapa, hay problemas que están descalabrando las actividades económicas locales y son una muestra de la irresponsabilidad política y técnica del Gobierno estatal.

“Ya hay un déficit importante de pagos; hay incertidumbre en las elecciones locales por falta oportuna de recursos para materiales, no se liberan a tiempo las prerrogativas; empezaron a descontar de los sueldos de los trabajadores de la salud, la procuración de justicia está en riesgo y el transporte público está también paralizado”, criticó el priísta en esa ocasión.

El 16 de noviembre del 2012, Dossier Político publicó que el gobernador Guillermo Padrés nombró al ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga, un ex presidente municipal señalado por la actual administración por presuntas ilegalidades y desvío de millones de pesos del erario público, Director de Obras de Infraestructura Educativa.

El 13 de mayo del 2013, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de la Contraloría Municipal inhabilitó 10 años al ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga Hernández, por presuntos desvíos de recursos públicos en la pérdida de 205 toneladas de asfalto donadas por Pemex al Municipio.

La Contraloría notificó al Director de Obras de Infraestructura Educativa del Gobierno del Estado que además de no podrá ejercer un cargo público, pagará una multa de 3 millones de pesos y queda sujeto a una investigación del orden federal que también pesa sobre Jorge Humberto Vila Cueto, representante legal de la empresa OPSON, Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., quien firmó contrato el 25 de noviembre del 2010...

“Sin consentimiento de Petróleos Mexicanos, el entonces alcalde realizó convenio verbal con OPSON para que dispusiera del asfalto; violó así diverso clausulado del contrato, por lo cual ahora Pemex requiere el pago de un millón 538 mil 539 pesos con 19 centavos y, canceló todo tipo de apoyo social al Municipio de Guaymas”, lo anterior se desprende del Expediente CMQ 87/2012 hoy RO 04/13.